

Santiago, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

En estos autos Rol N° C-4380-2019 del Segundo Juzgado Civil de Concepción, en procedimiento ordinario de indemnización de perjuicios, por sentencia de doce de mayo de dos mil veintidós, se hizo lugar a la demanda de indemnización de perjuicios por daño moral, contra el Fisco de Chile, condenándolo a pagar a título de daño moral, en favor del actor, la suma de \$60.000.000.- (sesenta millones de pesos).

Impugnada esa decisión, la Corte de Apelaciones de Concepción, por sentencia de veintitrés de junio del año dos mil veintitrés, la confirmó con declaración que eleva la suma a indemnizar por concepto de daño moral a la suma a \$120.000.000 (ciento veinte millones de pesos).

Contra esa sentencia la parte demandada, dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo, el que se ordenó traer en relación.

Considerando:

1º) Que, la demandada, dedujo recurso de casación en la forma fundado en la infracción al artículo 768 N° 5, en relación con el artículo 170 N° 4, ambas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, e indica que la sentencia recurrida no contiene consideraciones de hecho o de derecho que sirvan de fundamento para aumentar la indemnización, lo que -según la recurrente- resulta evidente al analizar cada uno de los considerandos del fallo que pretende anular.

Señala que las consideraciones efectuadas por la sentencia recurrida con relación al monto de la indemnización otorgada al demandante, sin expresión de



nueva causa o antecedente en el que pueda fundar el ya referido aumento. Ya que el argumento que se plantea en el fallo de segunda instancia en realidad no implica un cambio radical de lo que ya se planteó en la sentencia de primer grado.

Por ello, solicita se acoja el recurso y se invalide la sentencia recurrida, se dicte nueva sentencia que rechace la demanda en todas sus partes o se fije en el monto que prudencialmente esta Corte decida.

2º) Que, la parte demandada deduce recurso de casación en el fondo, invocando para ello la existencia de dos errores de derecho en la sentencia recurrida.

Denuncia como primer error de derecho el rechazo de la excepción de pago invocada por ella, lo que constituye una contravención a los artículos 1 y 2 de la ley N° 19.992 en relación con los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, de la ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y artículos 19 y 22 del Código Civil.

Señala que el fallo recurrido incurrió en el vicio denunciado, ya que al fundamentarse el rechazo de la excepción, en el hecho de que el otorgamiento de tales beneficios no impide el accionar nuevamente para obtener una indemnización de perjuicios del órgano jurisdiccional.

Destaca que en el caso del demandante Sr. García Chamorro, fue reconocido como víctima en la nómina que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, lo cual es un hecho de la causa.



Conforme a ello, se hizo beneficiario de las reparaciones pecuniarias establecidas por la ley N° 19.992, que, a septiembre de 2019, ascendían a un total de \$36.131.899, además, de una pensión actual de \$176.389.-. Así, el fallo recurrido cometió error de derecho al rechazar la excepción de pago hecha valer por la demandada.

Agrega que el carácter reparatorio de la pensión y demás beneficios establecidos en la ley N° 19.992 deben entenderse dentro de una serie de medidas tomadas en el ámbito de la denominada “justicia transicional”, en la búsqueda de un equilibrio entre justicia y paz. En este contexto se dictaron las leyes N°s 19.123 y 19.992, entre otras, cuyas discusiones dan cuenta del sentido de las citadas normas.

Por otra parte, la demandada invoca como segundo error de derecho, la infracción a las leyes reguladoras de la prueba, toda vez, que la sentencia infringe el artículo 1698 del Código Civil, al invertir la carga de la prueba, en relación el artículo 2314 del mismo cuerpo legal.

Indica que conforme a la naturaleza de la acción deducida y al expreso tenor de la interlocutoria de prueba, el demandante debía necesariamente acreditar la existencia, origen, naturaleza y monto de los daños. Así las cosas, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.



Por ello, solicita se acoja el recurso y se invalide la sentencia recurrida, se dicte nueva sentencia que rechace la demanda en todas sus partes.

3°) Que, son hechos asentados en la presente causa los siguientes:

“1.- Que don Manuel García Chamorro fue víctima de prisión política y tortura, según consta en la nómina del Informe Valech, bajo el número 9540;

2.-Que al momento del golpe militar de septiembre de 1973, don Manuel García Chamorro militaba en las Juventudes del Partido Socialista, cursaba el cuarto año de la carrera de ingeniería de ejecución en mecánica en la Universidad Técnica del Estado y tenía 20 años de edad;

3.- Que para esa misma época, y pese a su juventud, el actor solventaba sus gastos y ayudaba a sus padres económicamente mediante los ingresos que le proporcionaba su labor como profesor de matemáticas en la Escuela Técnica de Talcahuano;

4.-Que don Manuel García fue detenido el 26 de octubre de 1973, mientras desarrollaba sus labores docentes en el Liceo Técnico de Lota, siendo trasladado a la Comisaría de Carabineros de dicha comuna, donde fue golpeado y torturado durante cuatro días para luego, el mismo día que cumplía la mayoría de edad legal de la época, ser conducido a la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concepción donde siguió siendo víctima de apremios ilegítimos, siendo trasladado, el día 5 de noviembre de 1973, al Centro de Detención instalado en el Estadio de Concepción, lugar en que se prolongaron las sesiones de tortura a las que era sometido;



5.- Que en marzo de 1974 el actor fue trasladado a la Cárcel de Concepción en calidad de detenido por haber sido sometido a proceso por la Fiscalía Militar en la causa Rol N 1928-1973, dictándose sentencia definitiva el 11 de febrero de 1975 por la que se le condenó a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo como autor del delito de pertenecer a un grupo armado;

6.-. Que durante el año 1976 la pena antes señalada le fue conmutada por la de extrañamiento, debiendo salir al exilio el 12 de octubre de 1976 junto a su cónyuge, con rumbo a Francia, donde trabajó como obrero metalúrgico, regresando a Chile el 17 de febrero de 1990 junto a su cónyuge y dos hijos de 12 y .años de edad, respectivamente”. (SIC)

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

4º) Que, en relación con el vicio de casación formal denunciado, es preciso destacar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia, y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales. Éstas, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo, entre las que figuran *-en lo que atañe al presente recurso-* en su numeral 4º, las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia;



5º) Que, el deber de fundamentación de las sentencias es esencial en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, con fecha 30 de septiembre de 1920 se dictó el Auto Acordado que regula pormenorizada y minuciosamente los requisitos formales que, para las sentencias definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.

Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de que se trata deben expresar las consideraciones de hecho que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión aquéllos sobre los que versa la cuestión que haya de fallarse, con distinción entre los que han sido aceptados o reconocidos por las partes y los que han sido objeto de discusión.

Agrega que, si no hubiera discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias determinar los hechos que se encuentran justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales. Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba rendida –*prosigue el Auto Acordado*- deben las sentencias contener los fundamentos que han de servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta anteriormente. Prescribe enseguida que, una vez establecidos los hechos, se enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo, agregando que, tanto respecto de las consideraciones de hecho como las de



derecho, debe el tribunal observar, al consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones requiera;

6°) Que, la exigencia de motivar o fundamentar las sentencias, no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez, lo que hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017);

7°) Que, en el mismo sentido y complementando lo anterior, la fundamentación adecuada de las resoluciones judiciales es parte esencial de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados



internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5º inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980;

8º) Que, útil resulta traer a colación lo expresado por los juristas nacionales don Mario Mosquera Ruiz y don Cristián Maturana Miquel, en su libro “Los Recursos Procesales”, quienes al analizar precisamente la causal del aludido arbitrio han dicho:

“En el mismo sentido, se nos ha señalado que esta causal concurre cuando el vicio consiste en la falta de consideraciones mas no en la impropiedad de estas; la circunstancia que las consideraciones sean erradas o deficientes no se sanciona con la nulidad del fallo, puesto que ese vicio se constituye según la ley por la falta de consideraciones de hecho o de derecho, situación que se ha entendido se produce, asimismo, cuando entre sí son contradictorias o se destruyen unas a otras” (MOSQUERA RUIZ, Mario y MATURANA MIQUEL, Cristián: Los Recursos Procesales. Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2010. P. 250);

9º) Que, la sentencia impugnada hace un análisis de los antecedentes que llevaron a confirmar, con declaración de elevar la suma a indemnizar por concepto de daño moral, señalando en su motivo décimo cuarto lo siguiente: *“Que ahora bien, en lo que concierne al monto indemnizatorio, cuestionado por ambos litigantes, cabe tener presente que tal y como denuncia el demandante, el fallo de primera instancia no fundamenta suficientemente su decisión y no se hace cargo,*



más que someramente, de la particular situación de quien exige reparación pese a que se trata de una víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, que estuvo privada de libertad un extenso período de tiempo, prácticamente tres años, y que luego de ser torturado sistemáticamente en diferentes centros de detención, se vio obligado a abandonar el país para vivir en el exilio durante 14 años. En este análisis debe tenerse en cuenta que una vida muy joven, que tejía su futuro profesional como ingeniero, se vio violenta e irreparablemente modificada; que el actor fue desarraigado de sus raíces culturales y geográficas, y que tuvo que enfrentarse a un idioma y costumbres desconocidas, dependiendo en principio de la solidaridad de aquellos que le tendieron la mano a tantos exiliados, que como don Manuel García, fueron expulsados más allá de nuestras fronteras luego de experimentar los horrores de la tortura”.

10°) Que, así formulada la argumentación, no constituye una omisión de los razonamientos denunciados por el arbitrio. No hay que olvidar que la indemnización del daño producido por el delito, así como la acción para hacerla efectiva, resultan de máxima trascendencia al momento de administrar justicia, comprometiendo el interés público y aspectos de justicia material, que permiten avanzar en el término del conflicto.

11°) Que, conforme lo expuesto, aparece con meridiana claridad que la sentencia materia del recurso dio cabal cumplimiento a las exigencias legales que el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil le impone, sin que exista mérito alguno para cuestionarla a través del arbitrio en examen. Distinto es el caso que el impugnante no comparta los razonamientos jurídicos o la aplicación de una norma



en particular en cuanto a sus requisitos legales. Sin embargo, dichas discrepancias no pueden servir de base para construir una causal que sólo está dirigida a controlar que la sentencia cumpla con ciertos requisitos formales mas no para cuestionar la aplicación o inaplicación normativa, pues tal reproche la ley lo ha reservado para la casación sustancial, motivo por cual se desestimara la causal de nulidad formal en análisis, por tal razón el recurso no puede prosperar.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo.

12°) Que, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados al actor, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los Tratados Internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

13°) Que, también debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva de los artículos 6, inciso tercero, de la Constitución Política de la República y 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las que, de aceptarse la tesis del fallo, quedarían inaplicadas.

Por otra parte, los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser



incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

Así las cosas, estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de Derecho Internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile

14°) Que, en relación con la excepción de pago, cabe tener presente que no existe una incompatibilidad entre los beneficios que otorgan la leyes N°19.234, N°19.992, y N°20.874 y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial, por lo que no existe motivo alguno para presumir que dicho estatuto se dictó con el ánimo de indemnizar todo daño moral sufrido por las víctimas de derechos humanos. A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las referidas leyes, no importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral. (SCS Rol N° 9755-15 de 21 de junio de 2016; Rol N° 15298-18 de 19 de diciembre de 2018 y Rol N° 15402-18 de 21 de febrero de 2019, Rol 91583-21 de 4 de octubre de 2024).



En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto, los beneficios establecidos en las referidas leyes no pueden ser considerados en la indemnización del daño moral sufrido por el actor y, por ende, no pueden ser considerados para determinar el monto de la indemnización, como indicó la sentencia en su motivo octavo.

15°) Que, a mayor abundamiento, la historia fidedigna de la ley, sumada a las características de los beneficios que ella otorga, permite concluir que no se logra el mismo propósito que se persigue con la indemnización demandada en autos, como afirma la sentencia recurrida, pues no se trata de una reparación total al daño sufrido por las víctimas, sino de una política asistencial desarrollada por el Estado de Chile respecto de los familiares de las víctimas, lo que permite entender que los beneficios que se conceden quedan supeditados a condiciones objetivas para su goce, como lo es la edad y el hecho de estar o no cursando estudios superiores.

Consecuencia de lo reseñado, es que los beneficios pecuniarios obtenidos por el demandante, tienen una naturaleza asistencial y por tal motivo, no privan a las víctimas del derecho a instar por la reparación efectiva de todo daño sufrido, por lo que es manifiesto que se verificó el error de derecho en que se funda el recurso, al descontar de la indemnización de perjuicios por daño moral ordenada pagar a los demandantes, por el Fisco de Chile, lo percibido por el demandante por concepto de las reparaciones establecidas en las leyes N^{os} 19.992, 19.234 y 20.874.

Que, en esas condiciones la excepción de pago alegada será desechada.



16°) Que, en relación con el segundo capítulo de nulidad invocado por la defensa, en que denuncia como error de derecho que los sentenciadores infringieron las normas reguladoras de la prueba, denunciando para ello como normas infringidas los artículos 1698 y 2314 ambas disposiciones del Código Civil.

17°) Que, la sentencia de primera instancia, confirmada por la sentencia recurrida, en su motivación tercera da cuenta de la prueba rendida por la demandante a fin de acreditar sus pretensiones, consistente en evidencia documental y testimonial, que permitieron tener por acreditado los hechos, así como el daño y la extensión del mismo, de manera que la denuncia de la demandante en orden a haber alterado el onus probandi, no es tal, ya que, la demandante rindió prueba al efecto. Por el contrario, el considerando 4° de la sentencia de primera instancia, confirmada por la de segunda, se deja asentado que es la parte demanda la que no rindió prueba en el juicio.

18°) Que, de forma reiterada y sistemática, la jurisprudencia de este Tribunal de casación ha reconocido la soberanía o intangibilidad que mantienen los jueces de fondo en su facultad sobre la determinación de los hechos. Tal postulado le impide a la Corte Suprema rever los hechos y la obliga a aceptarlos. En ese entendido, en su momento se sostuvo que *“a los jueces de la instancia les corresponde el establecimiento de los hechos y para este efecto disponen de la facultad privativa y soberana de valorar el mérito intrínseco de los diversos medios legales de prueba acumulados en la causa, sin que el ejercicio de esta facultad de ponderar y comparar discrecional y subjetivamente esos mismos elementos del proceso, esté sujeto a la censura del tribunal de casación, ni pueda caer dentro del ámbito en que opera la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de*



Procedimiento Penal, puesto que las leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción da base al recurso de casación en el fondo, son sólo aquellas que establecen prohibiciones o limitaciones a la facultad antedicha, como lo sería la admisión en los fundamentos del fallo de antecedentes ajenos a los medios de prueba reconocidos como tales por el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 56, citado en la obra Tratado de Derecho Procesal Penal. T. II, Pág. 393 y 394, del autor Rafael Fontecilla Riquelme). En un mismo sentido se resolvió que, “la apreciación de las leyes reguladoras de la prueba a que alude el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, implica la violación de una norma legal relativa a la prueba, pero no a la apreciación de los hechos, que la ley siempre radica, soberanamente, en los jueces de las instancias” (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 89, citado por el referido autor).

19°) Que, como se puede apreciar, existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado, los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos y, ese ámbito escapa de la acción revisora de la Corte Suprema, salvo que los jueces violenten de forma grave las normas reguladoras de la prueba y ello tenga influencia en lo dispositivo del fallo –cuyo no es el caso de autos–, lo que debe ser descrito con claridad, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de ciertos elementos probatorios que, por lo demás, fueron debidamente justipreciados a propósito del análisis efectuado por los sentenciadores de fondo



en el ejercicio de sus atribuciones propias, materia que, como se ha dicho, escapa del control de esta Corte, idea que predomina desde el Proyecto del Código de Procedimiento Penal para la República de Chile y que se devela en las palabras de don Manuel Egidio Ballesteros, quien expresare: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones”*.

20°) Que de la lectura del recurso no aparece, en consecuencia, infracción a las leyes reguladoras de la prueba –que como se ha asentado repetidamente por esta Corte, procede cuando se altera el *onus probandi*, existe contravención formal de la ley, errónea interpretación de la ley, o falsa aplicación de la ley- y únicamente se plantea una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción relacionados en la sentencia, discordándose sólo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 766, 768 N° 5, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

Que **se rechaza** el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo deducidos por el Consejo de Defensa del Estado, en contra de la sentencia de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en la causa 1745-2022 Civil, la que no es nula.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Etcheberry.



ROL N° 161.719-2023



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., Maria Gajardo H. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, cinco de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

